

Santiago, doce de junio de dos mil veintitrés.

VISTOS:

PRIMERO: Que, comparece Juan Pablo Arriagada Aljaro, chileno, abogado, en representación, según se acreditará, de la sociedad “CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A.”, del giro de su denominación, RUT 99.500.840 -8, con domicilio legal en Avenida Vitacura N° 2736, piso 14, comuna Las Condes, demandando de reclamación de resolución de multa, en contra de la INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO MAIPÚ, representada legalmente por don Javier Cuevas Ojeda, ignora profesión u oficio, en su calidad de Jefe de la Inspección, ambos domiciliados en Avenida Pajaritos N° 3271, local 2, 3 y 4, comuna de Maipú.

Señala que reclama las resoluciones números 7729/22/76 y 7729/22/77, ambas dictadas por doña Angelica Bustamante Aliste de fecha 31 de octubre de 2022.

La demandada inició un proceso de fiscalización nacional a la reclamante, derivado de un reclamo que presentó el Sindicato Interempresa Cencosud Administradora de Procesos S.A. (RSU 1309/1037), supuestamente por no dar cumplimiento al convenio colectivo vigente a la fecha, referente a las obligaciones contenidas en la cláusula número décima novena: respecto a la caída de sistemas y fijación de metas.

En el marco de las fiscalizaciones (N° 1532 y 1534) que dan origen a las presentes reclamaciones de multa administrativa, el fiscalizador solicitó la exhibición de la siguiente documentación respecto de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en sus locales ubicados en Camino a Melipilla N° 10.939, comuna de Maipú y Av. Américo Vespucio N° 1501, comuna de Cerrillos: a) Contrato Colectivo celebrado con el Sindicato Interempresa Cencosud Administradora de Procesos S.A., b) Contratos de trabajos y anexos, c) Liquidaciones de remuneraciones, d) Reporte plataforma CAU (caída de sistema) últimos seis meses.

La reclamante cumplió con lo solicitado y presentó tal documentación al fiscalizador de forma presencial con fecha 25 de octubre de 2022.



Posteriormente, el fiscalizador dictó las resoluciones que se reclaman en la cual constató la existencia de una supuesta infracción y aplicó multas por un total de 26,73

Ingresos Mínimos Mensuales cada una.

Los hechos constatados por la fiscalizadora Bustamante en ambas resoluciones administrativas (las cuales solamente difieren en el local en donde se habrían verificado las infracciones) y por los cuales se le aplicó sendas multas son “no exhibir toda la documentación exigida que deriva de las relaciones de trabajo, necesaria para efectuar las labores de fiscalización, con respecto al reporte plataforma CAU, informa las caídas del sistema operativa de manera diaria como mensual de la tienda ubicada...”

En primer término, denuncia que se ha incurrido en una falta de congruencia entre los hechos constatados por la fiscalizadora Sra. Bustamante en la infracción cursada y el formulario F I-4. Se entiende por el principio de congruencia procesal la relación coherente y lógica que debe concurrir entre los hechos investigados y lo resuelto en la resolución que cursa multa administrativa.

En la especie, a la fiscalizadora se le exhibió toda la documentación requerida y respecto del “reporte plataforma CAU”, se le indicó que el mencionado documento no existe, por lo que podemos concluir que no es efectivo que se haya infringido por la empresa las normas supuestamente infraccionadas y que dicen relación con el cuerpo normativo que rige a la Dirección del Trabajo.

Se debe tener en cuenta que los reportes de caídas de sistemas no se tratan de documentos que legalmente deban obrar en poder de la empresa, es decir, que por ley cualquiera empleador deba contar con ellos por ser parte de la relación laboral, por lo cual esta no tenía la obligación de tenerlos ni exhibirlos.

Se pregunta ¿Cuál es el hecho infraccionado, si dentro del proceso fiscalizatorio se le indicó a la fiscalizadora que el documento requerido no existía, pero si se acompañaba otro para los mismos fines? ¿De qué manera se afectó a la fiscalización o se entorpeció su labor si se acompañó el resto de la documentación requerida? No sabiendo las respuestas, ya que



existe una evidente contradicción y poca claridad entre los hechos que consignan las resoluciones impugnadas con lo exhibido en la fiscalización, vulnerando así el principio de congruencia, lo que torna un acto administrativo viciado.

Plantea que si su parte presentó toda la documentación requerida y le indicó que al fiscalizador que respecto del reporte plataforma CAU no existía como documento, pero se acompañaba otro medio de prueba para ese fin, no puede sostener coherentemente que se genera una infracción a los artículos 31 y 32 del D.F.L N° 2 de 1967.

Estima que la resolución reclamada adolece de un vicio formal que también la hace anulable en todas sus partes.

En subsidio y en todo caso, no puede cursar una infracción por no exhibir un documento que la ley no le obliga a mantener en su poder y que por tanto no estará en condiciones de exhibir.

En subsidio, argumenta que el monto de la multas aplicado es desproporcionado e ilegal. Cita El Decreto con Fuerza de Ley (en adelante D.F.L) N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social en sus artículos 31 y 32, señalando que el tenor literal de dichas normas consagra expresamente la sanción que debía aplicársele, esto es, en un rango que va desde de 3 sueldos vitales mensuales hasta 10 sueldos vitales anuales, lo que en la especie no se verifica por cuanto se aplica una multa basado en un documento denominado “tipificador de sanciones” que no es otra cosa que una mera pauta o guía para sus funcionarios para el establecimiento de sanciones laborales en que pueden incurrir los empleadores, así como las multas asociadas a estas , pero que en caso alguno puedan vulnerar sanciones expresamente establecidas por el legislador, por lo que resulta ser ilegal la cuantía de la multa impuesta ya que no se atiende a la norma que la regula, y adicionalmente teniendo en cuenta que la reclamante en todo momento tuvo una actitud colaborativa con el proceso de fiscalización y la omisión en enviar la información adicional requerida fue producto de un error humano de carácter involuntario y a la postre no generó ningún tipo de perjuicio a la fiscalización .



Estima se puede concluir que la cuantía de la multa cursada en estos autos es ilegal por cuanto vulnera los artículos 31 y 32 del D.F.L N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, los cuales disponen expresamente el monto de la sanción y que ha sido confirmada recientemente por los Tribunales Laborales.

En subsidio, solicita rebaja de la cuantía de ambas multas por infracción al principio de proporcionalidad.

Hace presente que estamos ante un procedimiento de reclamación establecido en el artículo 503 del Código del Trabajo y para que el evento de que se decida rechazar las alegaciones principales, las mismas puedan ser rebajadas prudencialmente, conforme al mérito de los antecedentes y las probanzas que se incorporen en el proceso.

Solicita dejar sin efecto ambas resoluciones administrativas reclamadas por cuanto existe una evidente infracción al principio de congruencia entre los hechos constatados en los documentos oficiales de la fiscalización y los que forman parte de la multa administrativa, los cuales son contradictorios; en subsidio, establecer que el monto de las multas son totalmente desproporcionados e ilegales; finalmente, y también de forma subsidiaria, rebajar el monto de ambas multas cursadas al mínimo.

SEGUNDO: Que, contesta la reclamada, negando todos los hechos presentados en el reclamo por la contraria, salvo aquellos expresamente admitidos; solicitando su rechazo en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Expone que las multas se originan a partir dos procedimientos de fiscalización (N° 1532 y N° 1534), derivadas de un reclamo en que la una organización sindical en que señala que se incumple el contrato colectivo respecto de la cláusula Décima Novena, respecto de la caída de sistema y fijación de metas, lo que tiene relación con las remuneraciones de los trabajadores. Se sostiene que la empresa informa las metas de forma unilateral, donde no se han explicado los criterios por los cuales se fijan dichas metas, obligación consagrada en el contrato colectivo, para que los trabajadores comprendan las metas que deben alcanzar. Indica igualmente que la empresa no ha entregado el detalle de pago por caídas de sistemas, donde no hay una explicación ni detalle de esos pagos.



Para llevar a cabo las fiscalizaciones, la funcionaria actuante concurre a las dependencias de la empresa, ubicadas en Av. Américo Vespucio N° 1501, de la comuna de Cerrillos y en Camino a Melipilla N° 10939, de la comuna de Maipú. En ambos procedimientos, se le informó que la empresa no mantiene la documentación laboral en las tiendas, sino que se encuentra en la oficina central.

Por tal razón, se requiere la documentación mediante el formulario correspondiente para que fuese exhibida posteriormente. Dentro de la documentación requerida, en ambos casos, se encontraba el reporte plataforma CAU, que informa las caídas del sistema operativa de manera diaria como mensual.

El día 25 de octubre de 2022, comparece con poder simple don Lucero Maldonado, abogado, quien no exhibe toda la documentación requerida en ambas visitas. Además, mediante declaración jurada simple, dentro de lo pertinente, comunica lo siguiente:

“IV. Respecto a reporte plataforma CAU: La información solicitada por vuestra Inspección dice relación con los métodos de operación internos de la compañía, motivo por el cual esta reviste el carácter de confidencial y por lo tanto no será entregada en el presente proceso de fiscalización. Sin perjuicio de lo anterior, la empresa se encuentra llana a entregar todo tipo de información y documentación relativa a la determinación de la remuneración variable de los trabajadores fiscalizados”.

Considerando lo anterior, se cursa sanción administrativa por no exhibir reporte plataforma CAU de los periodos abril a septiembre 2022, información relevante para la fiscalización ya que este reporte informa las caídas del sistema en forma mensual, indicándose en la Resolución de Multa N° 7729/2022/76 lo siguiente:

“1. No exhibir toda la documentación exigida que deriva de las relaciones de trabajo, necesaria para efectuar las labores de fiscalización con respecto al Reporte Plataforma

CAU, informa las caídas del sistema operativa de manera diaria como mensual de la tienda ubicado en Av Américo Vespucio N° 1501 comuna Cerrillos.”

En cuanto a la Resolución de Multa N° 7729/2022/77, se indicó como hechos constitutivos de la infracción lo siguiente:

“1. No exhibir toda la documentación exigida que deriva de las relaciones de trabajo, necesaria para efectuar las labores de fiscalización con respecto al Reporte Plataforma CAU, informa las caídas del sistema operativa de manera diaria como mensual de la tienda ubicado en camino Melipilla N° 10939 comuna Maipú.”

En ambos casos, se indicó como norma infringida y sancionatoria lo dispuesto en el artículo 31 y 32 del D.F.L N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Hace presente que los hechos que configuran las infracciones sancionadas fueron constatadas por la fiscalizadora de este Servicio, doña Angélica Bustamante Aliste, en el cumplimiento de sus funciones, los cuales fueron consignados en el informe de fiscalización y resolución de multa que se incorporará en la etapa procesal pertinente, documentos que gozan de Presunción Legal de Veracidad establecida en el artículo 23 de D.F.L. N°2 de 1967, Ley Orgánica de este Servicio, que opera para todos los efectos legales, incluso para la prueba judicial, lo que en concordancia con el art. 1698 del Código Civil, determina que la carga de la prueba corresponderá a la reclamante, quien deberá probar que su actuar se ajusta completamente a las normas laborales vigentes.

La actora reclama de ambas multas de forma conjunta, sin distinguir entre ellas, señalando los mismos fundamentos, por lo que, igualmente responderá a lo alegado refiriéndose a ambas multas. Dentro de sus fundamentos, la empresa se refiere al principio de congruencia; sostiene que se indicó a la fiscalizadora que los documentos no existían y que se acompañaban otros para los mismos fines, por lo que no se entorpeció la labor de la fiscalizadora. Al respecto, cabe señalar que, según se indicó previamente, no es efectivo que se haya dicho que los documentos no existen ni que sí se hayan acompañado otros para los mismos fines, sino que simplemente se indicó expresamente la documentación no sería entregada durante la fiscalización.

Lo anterior permite establecer que no sólo no es efectivo lo sostenido en el reclamo, en cuanto a las explicaciones dadas por la empresa durante el procedimiento de fiscalización,



sino también que no existe el vicio alegado en cuanto a la falta al principio de congruencia, toda vez que la resolución de multa surge a partir de la falta de exhibición de documentación y no de que se haya indicado que esta no existía.

En cuanto a que no se hubiese entorpecido la labor de la fiscalizadora, lo cierto es que el documento fue requerido porque se estimaba necesario, señalándose además en el informe que la documentación requerida se trataba de “información relevante para la fiscalización ya que este reporte informa las caídas del sistema en manera mensual”, lo que tenía directa relación con la materia a fiscalizar.

Hacer presente los artículo 31 y 32 del D.F.L N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Estima resulta claro que lo establecido por el legislador en las normas señaladas, es una facultad para los funcionarios de la Dirección del Trabajo y una obligación para los empleadores. Lo anterior es relevante, puesto que teniendo el empleador una obligación y no una facultad, no puede disponer del requerimiento hecho por la fiscalizadora, determinando qué documentos desea exhibir o calificando cuáles son necesarios para la fiscalización. Adicionalmente, considerando lo expuesto por la reclamante, cabe destacar que la norma citada no limita la facultad del fiscalizador en los términos alegados, en el sentido de que sólo pueda solicitarse la documentación que el empleador está obligada legalmente a mantener. Si se hubiese querido establecer la facultad de los fiscalizadores en esos términos, expresamente se hubiese señalado, tal como lo dispone, por ejemplo, el artículo 453 N° 5, que expresamente limita el apercibimiento en caso que se requiera exhibición de documentos a “aquellos que legalmente deban obrar en poder de una de las partes”. Por el contrario, en el artículo 32 citado, se hace referencia a “toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización”, por lo que no es efectivo que el empleador no haya tenido la obligación de exhibir la documentación requerida, más aun si lo señalado en la fiscalización no fue la inexistencia de la misma sino la oposición de la empresa a su entrega.



Sostiene que la reclamante reconoce los hechos constitutivos de la infracción, en cuanto a no haber exhibido la documentación requerida, es que no cabe sino concluir que no existe error de hecho ni vicio alguno de los señalados por la actora, por lo que debe rechazarse su petición.

En relación a la cuantía de las multas, indica que la actora en primer lugar alega que la cuantía fue fijada considerando lo dispuesto en el “tipificador de sanciones”, sin ajustarse a lo dispuesto por el legislador.

Lo anterior no es efectivo, toda vez que, si bien se ha aplicado la sanción considerando lo dispuesto en el Tipificador de Infracciones de la Dirección del Trabajo, lo cierto este se ajusta al marco legal.

Explica que resulta útil traer a la vista nuevamente lo dispuesto en el artículo 32 del D.F.L N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que indica que:

“La infracción a las disposiciones del artículo precedente será sancionada con multa administrativa de tres sueldos vitales mensuales, escala A) del departamento de Santiago hasta diez sueldos vitales anuales del mismo departamento que será aplicada por el Inspector del Trabajo que la constató.”

Dicho esto, debe hacerse presente que el artículo 8 de la Ley N° 18.018 regula la conversión de las sumas expresadas en sueldos vitales, señalando en su inciso 2° que:

“La conversión señalada en el inciso anterior será fijada por decreto supremo del Ministerio de Justicia respecto de las cuantías, penas o sanciones administrativas expresadas por las leyes en sueldos vitales o porcentajes de ellos.”.

Ahora bien, el Decreto Supremo N° 51, de 1982, es el que finalmente fija las equivalencias entre ambas unidades, estableciendo que un sueldo vital mensual es equivalente a un 22,275639% de un IMM, o que un sueldo vital es igual a 0,222757 IMM.

Considerando además que según da cuenta la equivalencia en dinero que dicho decreto fija, y según es de conocimiento público, un sueldo vital anual es igual a doce sueldos vitales



mensuales (así como consecucionalmente 1 IMA es igual a 12 IMM) nos encontramos con que el rango de aplicación de la multa en cuestión es el siguiente: Mínimo 3 sueldos vitales mensuales 0,668271 Ingresos Mínimos Mensuales, y máximo 10 sueldos vitales anuales (120 sueldos vitales mensuales) 26,73084 Ingresos Mínimos Mensuales

Afirma resulta del todo claro que ésta se encuentra ajustada a derecho en relación a su cuantía, aplicándose el máximo permitido en este caso, considerando la evaluación hecha de forma previa por la Dirección del Trabajo, que consta en el Tipificador de Infracciones; y a las instrucciones contenidas en el Manual de Procedimiento de Fiscalización de la Dirección del Trabajo, de octubre de 2021, que contiene las instrucciones vigentes a la fecha de la fiscalización, por lo que no es efectivo que se haya aplicado una sanción ilegal.

Alude al efecto relativo de las sentencias.

En cuanto a lo alegado por la empresa respecto de que deben rebajarse las multas considerando el principio de proporcionalidad, debe hacerse presente que la actora realiza una alegación genérica, sin referirse en particular a las dos sanciones aplicadas. Adicionalmente, hace presente que las multas aplicadas dependen de la gravedad de la infracción, y que la Dirección del Trabajo está facultada para establecer la cuantía de las multas dentro del margen que el legislador ha establecido, lo que en este caso se ha respetado, por lo que no existe fundamento alguno para modificar lo resuelto, más aun considerando los efectos de las infracciones cometidas.

Teniendo en cuenta que las multas se ajustan a derecho y a la pauta previamente elaborada por Dirección del Trabajo, denominada “Tipificador de hechos infraccionales y pauta para aplicar multas administrativas”, publicada en la página web del Servicio, así como las instrucciones vigentes a la fecha de la fiscalización, no podría calificarse de arbitraria o desproporcionada la sanción.

Concluye que las resoluciones de multa se han emitido considerando los hechos constatados, dentro del marco jurídico establecido, sin que existan ninguno de los vicios que señala la actora, por lo que debe ser rechazado el reclamo en todas sus partes.



Solicita declarar en definitiva el rechazo del mismo en todas sus partes, manteniéndose firme la Resolución de Multa N° 7729/2022/76 y 7729/2022/77, ambas de fecha 31 de octubre de 2022, dictadas por la Inspección Comunal del Trabajo Maipú, con costas a la reclamante.

TERCERO: Que, llamadas las partes a conciliación, no se produce.

CUARTO: Que, se fijaron como hechos no controvertidos: 1. Efectividad que con fecha 31 de octubre del 2022 se dictó la resolución de multa 7729/22/76 y la 7729/22/77. 2. En ambas multas se constatan los siguientes hechos “No exhibir toda la documentación exigida que deriva de las relaciones de trabajo, necesaria para efectuar las labores de fiscalización, con respecto al reporte plataforma CAU, informa las caídas del sistema operativa de manera diaria como mensual de la tienda ubicada tanto en Avenida Américo Vespucio N°1501, comuna de Cerrillos, como en la tienda ubicada en Camino a Melipilla N°10939, comuna de Maipú”. Tales hechos se enmarcan en una infracción a los artículo 31 y 32 del DFL N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 3. Se aplicó a la actora la multa ascendente a la suma total de \$13.783.914, 26,73 ingresos mínimos mensuales respecto de cada local o infracción.

QUINTO: Que, se establecieron como hechos controvertidos: 1. La efectividad de los hechos signados en ambas multas. Esto es, la efectividad de existir una discrepancia o falta de congruencia entre los hechos investigados y lo expresado o resuelto en ambas resoluciones de multas administrativas. 2. En su caso, la efectividad que la actora no tenía la obligación de exhibir a la fiscalizadora el reporte plataforma CAU. Antecedentes que acrediten tal presupuesto factico. 3. En su caso, procedencia de la rebaja prudencial de ambas multas, por infracción al principio de proporcionalidad.

SEXTO: Que, en audiencia de juicio, las partes incorporaron los siguientes medios de prueba:

-Parte Reclamante:

Documental:



1. Resolución N° 7729/22/76 de fecha 31 octubre 2022 que consta de 2 paginas
2. Resolución N° 7729/22/76 de fecha 31 octubre 2022 que consta de 2 paginas
3. Declaración jurada presentada por la empresa dentro del marco de las fiscalizaciones N° 1532 y 1534 de fecha 25 octubre 2022
4. Impresión de correo electrónico intercambiado entre Angélica Bustamante y Guillermo Lucero de fecha 20 y 25 octubre de 2022, Asunto: solicita prórroga del plazo fiscalización 1532
5. Formularios F I-4 de fechas 21 de octubre de 2022 en relación a fiscalización N° 1534 que consta de 2 paginas

Se tiene por incorporada la prueba documental de la parte demandante.

Testimonial:

- 1.- Guillermo Ignacio Lucero Maldonado.

Exhibición de documentos:

- 1.- Que la demandada exhiba los documentos que componen la carpeta asociada a la fiscalización N° 1532 y 1534 y en particular informe de fiscalización, informe de exposición más los aportados por la reclamante a dicho proceso.

Se tiene por cumplida la exhibición.

-Parte Reclamada:

Documental:

1. Copia de Resolución de Multa N° 7729/2022/76, emitida por la Inspección Comunal del Trabajo Maipú, con fecha 31 de octubre de 2022.
2. Copia de carátula de informe de fiscalización N° 1532, con su documento anexo “Informe de exposición”, de fecha 28 de octubre de 2022.

3. Copia de Resolución de Multa N° 7729/2022/77, emitida por la Inspección Comunal del Trabajo Maipú, con fecha 31 de octubre de 2022.
4. Copia de carátula de informe de fiscalización N° 1534, con su documento anexo “Informe de exposición”, de fecha 28 de octubre de 2022.
5. Copia de declaración jurada de fecha 25 de octubre de 2022.

SEPTIMO: Que, en cuanto a la falta de congruencia alegada por la reclamada, preciso es señalar que, pese a que el artículo 23° del DFL 2 de 1967 del Ministerio Del Trabajo y Previsión Social, establece “Los Inspectores del Trabajo tendrán el carácter de ministros de fe respecto de todas las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro de las cuales podrán tomar declaraciones bajo juramento.

En consecuencia, los hechos constatados por los Inspectores del Trabajo y de los cuales deban informar de oficio o a requerimiento, constituirán presunción legal de veracidad para todos los efectos legales, incluso para los efectos de la prueba judicial.”, de modo que la carga de la prueba en relación a este punto, correspondía a la reclamante, la reclamada aportó Declaración Jurada de doña Barbara Soledad Cortes Gutiérrez, Subgerente de Relaciones Laborales y Administración de Personas Interina de la empresa reclamante, emitida en el contexto de la fiscalización que se revisa, en la que se lee. “La información solicitada por vuestra Inspección dice relación con los métodos de operación internos de la compañía, motivo por el cual esta reviste el carácter de confidencial y por lo tanto no será entregada en el presente proceso de fiscalización. Sin perjuicio de lo anterior, la empresa se encuentra llana a entregar todo tipo de información y documentación relativa a la determinación de la remuneración variable de los trabajadores fiscalizados.” De este modo, ha quedado establecido que la reclamada decidió no aportar el documento solicitado por la fiscalizadora.

OCTAVO: Que, en relación a lo anterior ha de considerarse también que, el artículo 31 del DFL 2 ya referido, establece “Los funcionarios del Trabajo podrán requerir de los empleadores, patrones o de sus representantes y de sus organizaciones, toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización que les corresponda y



todos los datos pertinentes para realizar las encuestas que patrocina la Dirección del Trabajo, incluso la exhibición de sus registros contables para su examen.

Toda aquella documentación que deriva de las relaciones de trabajo deberá mantenerse en los establecimientos y faenas en que se desarrollen labores y funciones.”, de modo que no resulta posible a la multada decidir que documentos entregar o no, y si estos pueden considerarse o no confidenciales, y siendo, además, que la fiscalizada a determinado no exhibir algún documento por estimarlo confidencial, es una decisión suya, de la que habrá de hacerse cargo, tal situación aparece contraria a la normativa aplicable en la especie.

NOVENO: Que, a más de lo anterior, y contraviniendo lo constatado por la fiscalizadora, todas sus alegaciones dicen relación con la inexistencia del documento solicitado, sin embargo, la empresa argumenta en su reclamo que le indicó que al fiscalizador que respecto del reporte plataforma CAU no existía como documento, -lo que no ha acreditado- agregando “pero se acompañaba otro medio de prueba para ese fin”, sin señalar qué documento aportó para ello, lo que tampoco fue acreditado.

DECIMO: Que, si bien el reclamante aportó la declaración de un testigo que insistió en que el documento solicitado no existe, consultado incluso por esta sentenciadora, no pudo aclarar cómo se medían los minutos de caída del sistema que permite dar cumplimiento a lo pactado, y que fue el motivo de inicio de la fiscalización. Todo lo anterior, impide acoger las alegaciones de la reclamante en este punto.

UNDECIMO: Que, la reclamante alega también que la multa que se aplicó a su parte resulta ilegal por infringir las normas que establecen su cuantía, lo que fue claramente explicado por la reclamada en la contestación de autos, por lo que teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 8 de la Ley N° 18.018 y lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 51, de 1982; estimándose que la cuantía de la multa cursada a la reclamante fue ajustada a la legislación vigente, se rechazarán las alegaciones sobre el particular.

DUODECIMO: Que, en cuanto a la solicitud subsidiaria de rebaja, que no contiene argumentos claros, y tratándose de alegaciones genéricas, sin sustento plausible, será también rechazada, según se dirá.



DECIMO TERCERO: Que, en consecuencia, habiéndose descartado los argumentos que sustentan el reclamo, las solicitudes planteadas no podrán prosperar y habrá de rechazárseles, según se dirá.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 503, 504, 505, 453 y siguientes del Código del Trabajo, se declara:

I.- Que **se rechaza** en todas sus partes la reclamación deducida, manteniéndose en consecuencia, las multas aplicadas mediante Resoluciones 7729/22/76 y 7729/22/77, ambas de fecha 31 de octubre de 2012

II.- Que se condena en costas a la reclamante, regulándose las personales en la suma de \$350.000 (trescientos cincuenta mil pesos).

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

RIT : I-439-2022

RUC : 22- 4-0446558-2

Pronunciada por don (ña) ANDREA LEONOR SILVA AHUMADA, Juez Titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

En Santiago a doce de junio de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la sentencia precedente.



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

San Martín #950 Santiago – Fono 02-9157000

Corre



XDEXFWYXHS

jud.cl

A contar del 02 de abril de 2023, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>